

LA VIOLENCIA EN EL CONFLICTO ARMADO DURANTE LOS AÑOS 90

CAMILO ECHANDÍA CASTILLA*

1. INTRODUCCIÓN

Al cumplirse los primeros diez años de la Constitución de 1991, que tuvo como objetivo fundamental hallar los mecanismos para que el Estado alcanzara la paz, es necesario analizar las transformaciones experimentadas por el conflicto interno durante estos años, que hacen que nuestro país esté aún lejos de lograr el fin de la guerra. Por consiguiente este artículo no se propone hacer un balance del efecto de la carta de 1991 en el proceso de violencia, sino más bien destacar algunos factores que han surgido durante estos últimos años y que dificultan la transformación de nuestra penosa realidad.

El primero y más importante de estos factores, es que la insurgencia colombiana ha encontrado en la autonomía municipal y regional, medianamente implementada en el pasado y ampliada por la nueva Constitución, un factor favorable a sus propósitos como organización armada. En efecto, a partir de los años ochenta, la guerrilla comenzó a variar su condición de organización rural con in-

fluencia exclusiva en zonas periféricas, logrando con el paso del tiempo consolidar su influencia en amplias zonas del territorio nacional, para lo cual orientó muchas de sus acciones a conquistar el poder local. Con la carta de 1991, que da sustento fiscal a la autonomía local y abre un amplio espacio a la descentralización, la guerrilla identifica plenamente el municipio como un renovado centro de gravedad determinante de la vida regional y de su efectividad en la consolidación de su influencia. Los alzados en armas, en este contexto, interfieren los procesos de elección de los gobernantes locales, determinando incluso a quienes deben favorecer los nombramientos, los contratos, las inversiones físicas y los programas sociales.

Las presiones de los grupos armados encaminadas a incrementar su influencia en la esfera local, se manifiestan en un creciente número de asesinatos, secuestros y amenazas que recaen en dirigentes políticos, funcionarios del Estado y civiles en general. Las acciones de los guerreros involucran cada vez más a los civiles, en una

* Profesor de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

dinámica en la que el desplazamiento es constante, pues las respuestas de los actores para mantener su influencia en las zonas consideradas estratégicas, se centran en la población.

La geografía de la violencia en el país, que expresa con claridad la situación descrita, por otra parte coincide con recientes estudios que llaman la atención sobre la existencia de un patrón espacial y temporal de difusión y contagio de los homicidios, determinado por el accionar sistemático de actores organizados que promueven la violencia. Lo anterior se define bajo el término de “difusión contagiosa”¹según el cual la presencia de estructuras que recurren a la violencia genera una dinámica que por un lado, afecta tanto a miembros de grupos rivales como a no miembros y por el otro, potencia una espiral de acciones violentas que se concentran en zonas específicas de la geografía y posteriormente se extienden hacia áreas contiguas tendiendo a persistir por algún tiempo.

En definitiva, ante la existencia en el país de una evidente subestimación de la violencia entendida como recurso de los protagonistas del conflicto interno, este artículo se ocupará de destacar este aspecto sobresaliente del conflicto armado colombiano durante los años noventa, mostrando su carácter estratégico y la ele-

vada concentración geográfica de los asesinatos selectivos y las masacres de civiles en estrecha relación con los actores armados que compiten por lograr el dominio sobre el territorio, los recursos y las poblaciones.

2. LA VIOLENCIA COMO RECURSO ESTRATÉGICO EN EL CONFLICTO ARMADO

Pese a la enorme magnitud que alcanza la violencia en los conflictos internos, éste ha sido un tema marginal en los estudios que en general se ocupan de las causas de los conflictos, la terminación de las guerras civiles, las consecuencias políticas y sociales de los conflictos, en los factores determinantes del éxito o fracaso de los alzados en armas, y en las motivaciones individuales y grupales que sustentan la rebelión. Los pocos estudios sobre esta materia han encontrado como característica común, que un número significativo de personas y de comunidades escapan a la violencia en que se sumen los escenarios del conflicto; la violencia frontal no es un fenómeno generalizado y son muy pocos individuos los que producen las muertes².

En Colombia, país reconocido por su muy elevada tasa de homicidio, la violencia producida en el conflicto interno ha

1. Cohen, J. y Tita, G., 1999. “Diffusion in Homicide”, en *Journal of Quantitative Criminology*, Vol 15. No.4.

2. Kalyvas, S., 2001, “La violencia en Medio de la Guerra Civil. Esbozo de una Teoría”, en *Análisis Político*, No.42, Iepri - Universidad Nacional, Bogotá.

sido por largo tiempo vista como una manifestación marginal e irrelevante, al atribuir el alto índice de muertes a una violencia esencialmente rutinaria derivada de un fenómeno cultural generalizado, marcado por una alta dosis de intolerancia de los ciudadanos³. Así mismo, se ha establecido en nuestro medio una estrecha relación entre las *condiciones objetivas* y la elevada intensidad de la violencia, dando menor importancia a los protagonistas del conflicto que, en el propósito de lograr sus objetivos, dirigen sus acciones contra los civiles inermes.

De otra parte, en sentido contrario al que plantean los diagnósticos más influyentes en nuestro país que han estado orientados por la denominada “violencia estructural”⁴, los estudios recientes sobre conflictos armados en el mundo, indican que su viabilidad depende del control sobre economías de guerra creadas a partir de productos agrícolas, mineros o ilegales, que han dado a los insurgentes la posibilidad de saquear los recursos necesarios

para financiarse⁵. En el caso colombiano es importante poner de presente que el enorme poder de fuego alcanzado por la guerrilla, se sustenta en el hecho de haber encontrado fuentes de recursos económicos muy importantes que a su vez determinan su perspectiva del presente, donde las fuentes de ingresos para la guerra parecieran inagotables.

La expansión territorial de los protagonistas del conflicto interno colombiano en los años noventa, orientada hacia la conquista de zonas con elevado valor estratégico, se expresa en el incremento del recurso al terror⁶. La lucha en que se trenzan los grupos paramilitares y la guerrilla, más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos resulta de la disputa por el control de zonas con un alto potencial para ambas fuerzas y donde el apoyo de la población civil se consigue por la vía de la violencia y la intimidación. De tal suerte, las organizaciones armadas ilegales actúan a nivel local como redes de poder, que manejan instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su con-

3. Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987, *Colombia: Violencia y Democracia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

4. La denominada “violencia estructural”, explica los conflictos armados esencialmente por la existencia de realidades de orden políticas, sociales, y económicas que comportan un grave deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores de la población. En un sentido amplio, la exclusión política, la pobreza y los profundos desequilibrios configuran las causas objetivas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad.

5. Collier, P., 2001, “Causas Económicas de las Guerras Civiles y sus Implicaciones de Política”, en *Revista El Malpensante*, No.30, Bogotá.

6. A diferencia de lo que se piensa comúnmente, el recurso al terror en la guerra interna no es una demostración de pérdida de control por parte del actor violento, responde más bien al desarrollo de planes cuidadosamente dirigidos hacia objetivos precisos, evitando la violencia indiscriminada que resulta totalmente contraproducente.

trol sobre la población a través de la intimidación, reemplazando los lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza mutua, que se manifiesta en la ley del silencio y en el aislamiento, a partir de los cuales es imposible construir comunidad y propiciar el desarrollo. En consecuencia, la violencia que genera la competencia entre los protagonistas del conflicto se explica por el desmembramiento de las redes adversarias como condición necesaria para subvertir y construir posiciones de poder⁷.

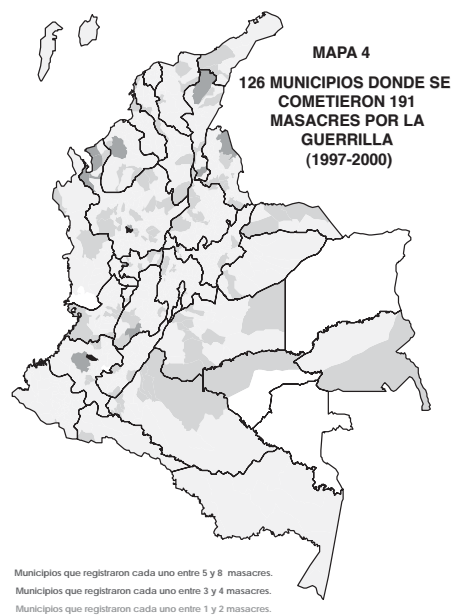
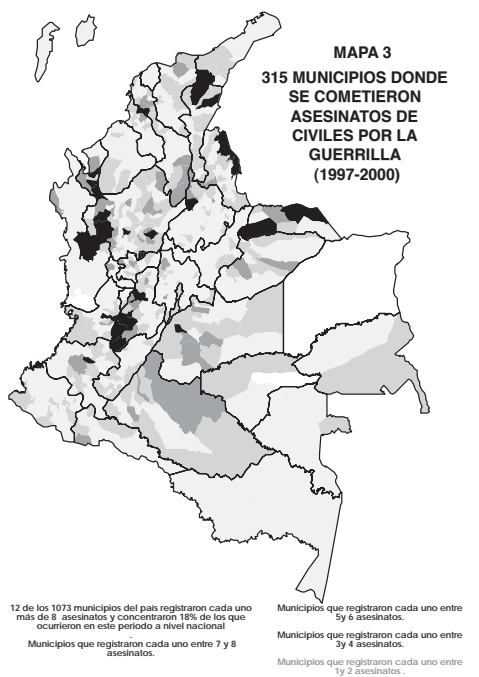
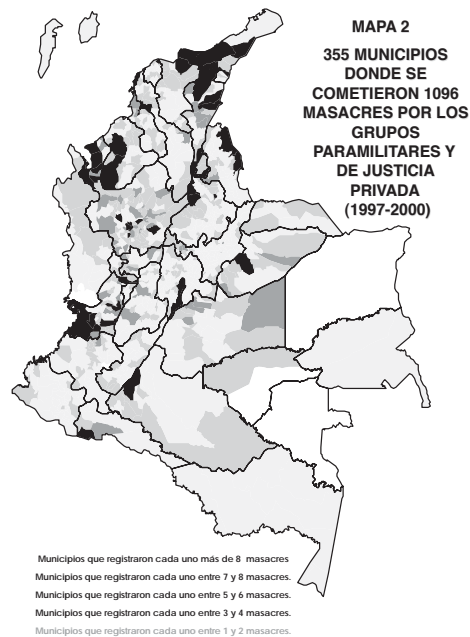
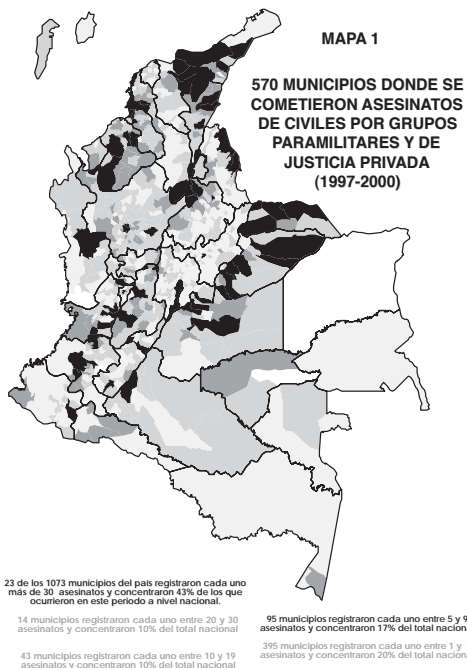
En el conflicto colombiano, la insistencia de las organizaciones al margen de la ley en perpetrar masacres tiene el fin primordial de amedrentar a la población y someterla bajo el terror, así como de afectar posibles redes de apoyo del enemigo, entre las que se incluyen informantes, familiares y milicias. Las matanzas han sido indiscriminadas; la lista en mano no es más que un sofisma, aunque en ocasiones sea cierta, pues más allá del interés de asesinar a aquellos que apoyan a un determinado actor armado, se busca demostrar a la población afectada que no puede apoyar al enemigo y que, en consecuencia, es mejor aliarse con el nuevo actor, el cual se termina imponiendo por medio de la violencia.

Para entender la situación y la dinámica del paramilitarismo basta observar

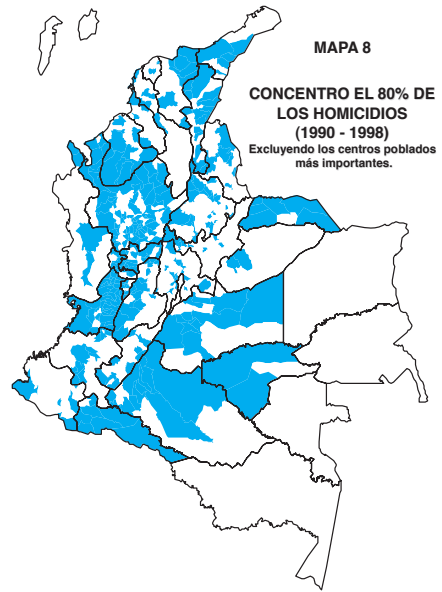
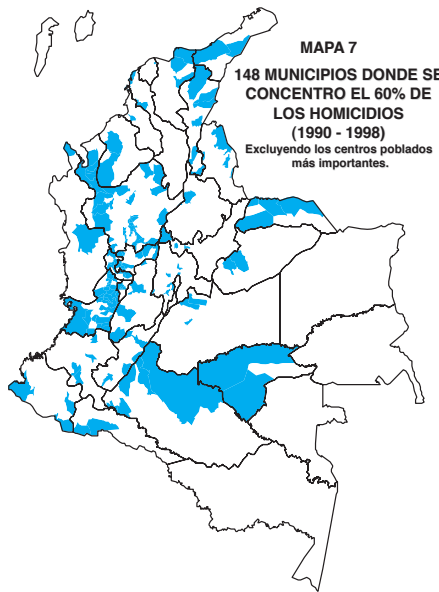
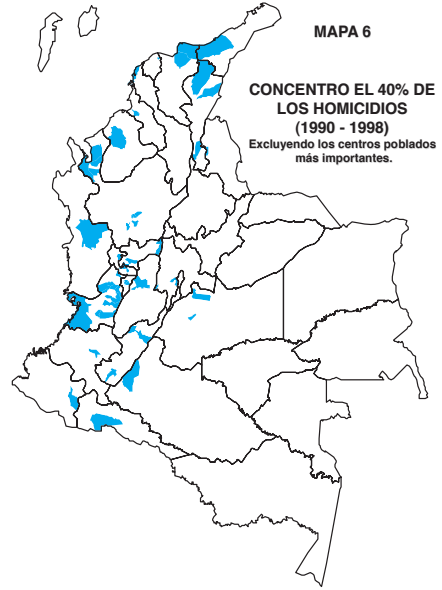
los Mapas 1 y 2, que representan la frecuencia con que este actor del conflicto ha cometido asesinatos y masacres, a nivel municipal. Hacia finales de los años noventa se presentaron masacres en las zonas de incursión paramilitar de 1997, en su continuidad como son Antioquia en el oriente y sudoeste, sur de la Guajira, Cesar, sur de Bolívar y Putumayo, lo cual permite entrever la lentitud del proceso paramilitar y lo cruento de su dinámica violenta. En el sur de Bolívar es de notar que los paramilitares han logrado una presencia muy importante en los municipios de San Pablo y Cantagallo, que el ELN ha pedido que sean rodeados de las garantías de seguridad necesarias para la realización de la Convención Nacional que daría comienzo al proceso de paz con esa organización. Urabá y Chocó también presentan masacres en continuidad desde 1995. Los años 1999 y 2000 se caracterizan por masacres en Norte de Santander y el Valle del Cauca, territorios que aparecen como nuevos escenarios del conflicto; también se observa una notable intensificación de los asesinatos en Barrancabermeja.

En la disputa por el control de territorios considerados estratégicos en el conflicto interno, éstos pasan de manos de un actor armado a otro sucesivamente. Con el fin de imponer sus reglas y homogeni-

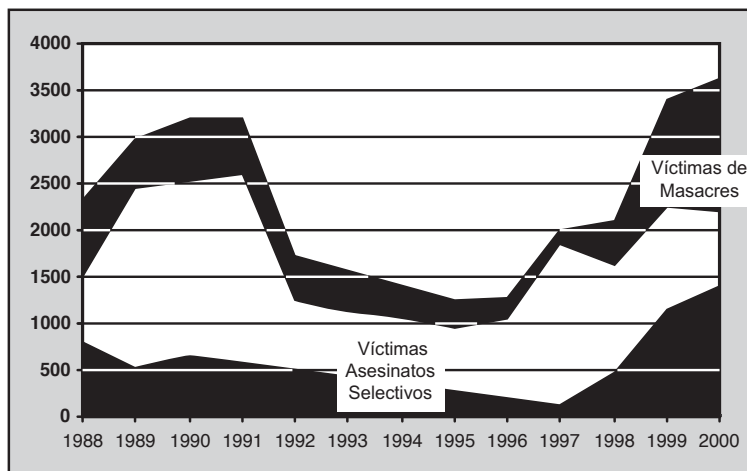
7. Suárez, A., 1999, "Configuraciones y Dinámicas de la Violencia Organizada en Colombia", en *Revista Colombiana de Sociología*, Volumen IV No.1, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.



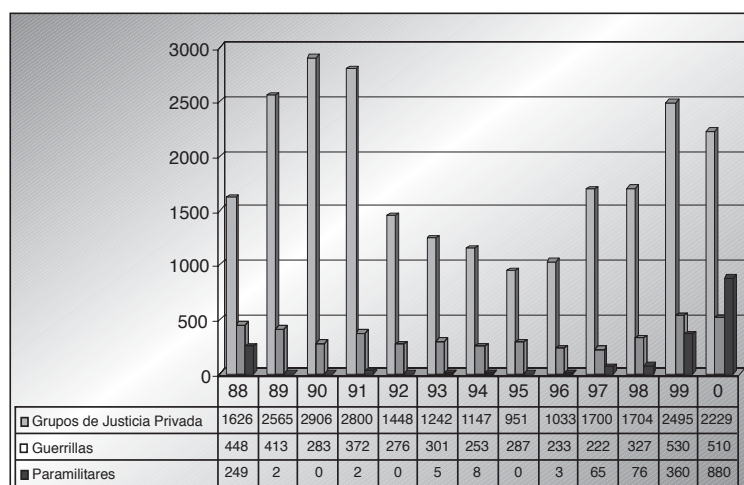
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Observatorio de Violencia.
 Mapas elaborados en Cabral 1.500 Versión 2.3



Evolución de los asesinatos selectivos y masacres (1988-2000)



Actores armados responsables de los asesinatos y masacres (1988-2000)



Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Observatorio de Violencia.

zar el territorio según sus intereses, los grupos armados le imprimen una dinámica local amigo-enemigo al conflicto⁸. Esta lógica es aplicada en las zonas de gran disputa entre paramilitares y guerrillas, como la Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Urabá, Magdalena Medio y Putumayo, donde los grupos al margen de la ley actúan con especial intensidad, golpeando poblaciones civiles inermes, a través de asesinatos selectivos y de masacres que, como se observa en los Mapas 1, 2, 3 y 4, han sido muy frecuentes a partir de 1997.

En la Sierra Nevada de Santa Marta⁹, mientras los grupos paramilitares pugnan por ascender para golpear a las guerrillas en su retaguardia estratégica, estas últimas han organizado una resistencia férrea que, a la larga, les ha permitido preservar condiciones financieras adecuadas y su capacidad para operar en las zonas más productivas. Esta estrategia, además, les ha permitido mantener un corredor de comunicación con la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Entre estas dos fuerzas se encuentran, inermes, comunidades de campesinos, colonos e indígenas que han sido víctimas de asesinatos selectivos, masacres, torturas y desapariciones, protagonizando además desplazamientos masivos de población. Los grupos para-

militares también iniciaron una fuerte ofensiva en los departamentos de Magdalena y Cesar, y no por casualidad las masacres y los desplazamientos forzados de población han venido en aumento. Han actuado con especial intensidad en las zonas planas y en las ciudades que circundan la Sierra Nevada, asesinando un elevado número de civiles.

Por otra parte, la irrupción paramilitar en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, sembrando el terror por medio de masacres como las que se registraron en la localidad de La Gabarra a partir de 1999, revela el propósito de este grupo armado de golpear las redes de apoyo de las guerrillas en el nororiente colombiano, donde estas organizaciones cuentan con fuentes de financiamiento muy sólidas. Con este comportamiento, los paramilitares pretenden disputarle a la insurgencia los recursos económicos que han constituido el factor decisivo de su fortalecimiento, pues es con esos dineros que se han financiado incursiones en zonas donde operan estructuras armadas con menores posibilidades de financiamiento.

Las finanzas de la guerrilla en esta zona nororiental del país no han dependido de manera exclusiva de la actividad petrolera, como se podría presumir. Es

8. Lair, E., 2001, "Colombia: Una Guerra Contra los Civiles", en *Revista Colombia Internacional*, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Bogotá.

9. Ver Vicepresidencia de la República, junio de 2001, "Panorama Actual de la Sierra Nevada de Santa Marta", publicación del Observatorio de Derechos Humanos, Bogotá.

sabido que La Gabarra constituye un importante centro de procesamiento de la coca producida en el Catatumbo, circunstancia favorable a la insurgencia, que obtiene ingresos a cambio de la prestación de “seguridad” a las actividades ilícitas que allí se desarrollan. Asimismo, la guerrilla se ha beneficiado con las actividades de contrabando que se realizan en la frontera con Venezuela, las cuales además, le han permitido acceder al mercado negro de armas. En este escenario las FARC han liderado, a partir del segundo semestre del 2001, una serie de acciones ofensivas contra los grupos paramilitares, con el propósito de reconquistar esta zona estratégica.

La región de Urabá, que vive también al ritmo de reconquistas territoriales de los protagonistas del conflicto, ilustra bastante bien cómo la lealtad de la población a los actores armados tiene un carácter instrumental y no ideológico, que se hace y deshace según las pérdidas y ganancias territoriales de militares, paramilitares y guerrilleros. Las FARC han aplicado en Urabá una estrategia similar a la utilizada por los paramilitares, pues en sus incursiones han dado muerte a personas consideradas redes de apoyo. Asimismo, han recurrido al terror para ampliar los corredores de acceso, que les permitan penetrar el eje de los paramilitares entre el Nudo de Para-

millo y la Serranía de Abibe, en Córdoba.

La intensidad de los combates en esta zona tiene relación con su importancia estratégica. En el caso de Urabá, tanto los narcotraficantes como los paramilitares y las guerrillas han hecho del golfo una zona vital en el desarrollo de sus propósitos, en cuanto allí tiene lugar un dinámico tráfico de armas, drogas ilícitas y precursores para su procesamiento, además de las importantes actividades bananera y ganadera.

En la región del Magdalena Medio¹⁰, en el corazón del país, los cultivos de coca en el sur de Bolívar y las explotaciones de oro en la serranía de San Lucas, constituyen factores que explican buena parte de la dinámica de la violencia de los últimos años y, en particular, el avance de los paramilitares. Una de las novedades introducidas en el *modus operandi* de estos grupos es la confrontación militar abierta con los frentes del ELN y las FARC, que tradicionalmente han controlado la zona, mecanismo que se suma a las masacres y asesinatos selectivos, que han ocasionado importantes desplazamientos de población y permitido a los paramilitares controlar considerables áreas estratégicas.

El propósito de los paramilitares en la región no se reduce a apoderarse del sur de Bolívar y aislar a las guerrillas de las bases financieras que por tantos años les sirvie-

10. Ver Vicepresidencia de la República, junio de 2001, “Panorama Actual del Magdalena Medio”, publicación del Observatorio de Derechos Humanos, Bogotá.

ron de soporte en esta zona. Estos grupos buscan, adicionalmente, apoderarse de Barrancabermeja, principal puerto de la región del Magdalena Medio, eje del complejo de la industria petrolera más importante del país y epicentro de una región heterogénea con variadas economías. Los grupos paramilitares también han buscado consolidar su influencia en los municipios del sur del Cesar, Sabana de Torres y Puerto Wilches, en el departamento de Santander, en donde su ofensiva ha sido especialmente intensa en los últimos cinco años, dadas las características ganaderas y agroindustriales de la región, así como el paso del oleoducto y la carretera a la costa, los cuales la hacen estratégica para los grupos armados al margen de la ley.

En el sur del país, los grupos paramilitares están atacando, desde 1998, principalmente en el departamento del Putumayo¹¹, particularmente en Puerto Asís, Valle del Guamuez (La Hormiga), Orito, San Miguel y, en general, en el bajo Putumayo, donde las FARC tienen una importante presencia, dada la dinámica del contrabando de armas, municiones y explosivos. Además, las actividades de producción de la coca que tiene lugar en estos municipios representan valiosas fuentes de

ingresos para las FARC. Es explicable, entonces, que los paramilitares hayan incurrido en la zona, con el propósito de disminuir el poder financiero y la capacidad militar de la guerrilla, limitando su control sobre tan importante área. Esta situación ha conducido a un incremento considerable de los desplazamientos de población y de las tasas de homicidios.

En estos complejos escenarios, la violencia asociada a los protagonistas del conflicto armado tiende a ser cada vez mayor, en la medida en que se imponen los asesinatos y masacres de civiles que son percibidos por las partes en conflicto como apoyos del adversario. Esta característica del conflicto colombiano en la actualidad, desvirtúa las interpretaciones corrientes que lo conciben como una guerra civil, configurando más bien una guerra contra los civiles¹².

3. DIFUSIÓN ESPACIAL DE LA VIOLENCIA

En Colombia existe una alta concentración de los asesinatos cometidos por los actores organizados de violencia en municipios que al mismo tiempo registran un elevado número de homicidios, como se descubre al contrastar los Mapas 5, 6, 7 y 8¹³, con los

11. Ver Vicepresidencia de la República, septiembre de 2000, "Panorama del Putumayo", publicación del Observatorio de Derechos Humanos, Bogotá.

12. Pécaut, D., 2001, *Guerra Contra la Sociedad*, Editorial Espasa, Bogotá.

13. Estos mapas que representan diferentes grados de concentración de los homicidios a nivel municipal, excluyen los diez centros poblados más importantes del país, donde tan sólo Bogotá, Medellín y Cali aglutinan algo más del 30% de los homicidios, pero espacialmente no comprometen un área significativa. En consecuencia, se presentan municipios en su gran mayoría pertenecientes a la estructura rural.

que se presentaron en la sección anterior. En el Mapa 5 se observa cómo alrededor del 20% de los homicidios ocurridos entre 1990 y 1998 se produjeron en tan solo 16 municipios, localizados en la región de Urabá, la Sierra Nevada de Santa Marta, las montañas antioqueñas y el Viejo Caldas. En el Mapa 6 se muestra cómo el 40% de los homicidios se concentra en 55 municipios, que en su mayoría se localizan en los alrededores de los focos iniciales. En la medida en que el porcentaje se eleva al 60% y 80% de los homicidios en los Mapas 7 y 8, es más notoria la expansión de la violencia desde los focos iniciales hacia un mayor número de municipios en los alrededores. Asimismo, al considerar un porcentaje mayor de homicidios, aparecen otros focos donde la violencia es muy intensa, especialmente en el oriente colombiano, en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Entre las zonas rurales más afectadas y donde se observa una alta difusión de la violencia homicida, se destacan la parte occidental de las cordilleras del Valle interandino del río Cauca en los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, y la parte oriental de las cordilleras en zonas de colonización de frontera de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.

Con respecto a la primera zona, donde prima el campesinado medio cafetero¹⁴, si se analizan los indicadores sociales de los municipios que en su mayoría conforman el Valle del Río Cauca, desde la perspectiva de las condiciones objetivas, estos difícilmente contribuirían a sustentar los elevados índices de violencia. En efecto, los municipios de la región tienen un alto índice de necesidades básicas satisfechas y presentan un porcentaje de población pobre por debajo del promedio nacional. En todo caso, no es menos cierto que los municipios que se habían caracterizado por el predominio de un campesinado medio, estable y acomodado, dedicado a las actividades de producción de café, con la crisis de este producto, albergan hoy un sector endeudado y desesperado. La cosecha cafetera en estas zonas ha producido tradicionalmente una alta inmigración de trabajadores de regiones más pobres, ocasionando alta densidad poblacional que no encuentra pleno empleo.

Sin hacer caso omiso a los profundos problemas sociales introducidos por la crisis cafetera, es preciso señalar que las FARC y el ELN han buscado aumentar su presencia en esta región, por cuanto por allí pasan de manera obligada los intercambios comerciales entre Medellín, Cali y Bogotá. El carácter estratégico de la región salta a la vista y de ahí que encaje perfec-

14. Ver Vicepresidencia de la República, octubre de 2001, "Panorama actual del Viejo Caldas", publicación del Observatorio de Derechos Humanos, Bogotá.

tamente en el propósito de la guerrilla de constituirse como una amenaza, incrementando su capacidad de afectar el desempeño global de la economía colombiana. El escalamiento del conflicto armado se ha producido en medio de la crisis cafetera que ha dejado en franca decadencia a los productores, quienes en muchas ocasiones no logran responder a los requerimientos básicos para el mantenimiento de la industria y mucho menos pueden satisfacer las exigencias económicas de los grupos guerrilleros.

Esta circunstancia llevó a que muchos campesinos, entre ellos cafeteros de mediano y gran poder económico, participaran en la conformación de las asociaciones Convivir¹⁵. Esta práctica en algunos casos derivó en la conformación de verdaderos ejércitos que se constituyeron de manera rápida en otros actores armados dentro de la zona¹⁶. Las Convivir, concebidas como una respuesta civil a los problemas de inseguridad causados por la mayor presencia de la guerrilla, tuvieron efectos perversos muy complicados de manejar, al transformarse en un factor de riesgo para los habitantes de la zona que en el momento en que no pudieron satisfacer sus exigencias fueron víctimas de la presión de estos gru-

pos. De otro lado, la guerrilla desarrolló intensas labores de inteligencia y consideró como sus enemigos a quienes de una u otra manera apoyaban tales asociaciones. Las prácticas de unos y de otros estaban encaminadas a lograr el apoyo de la población y a infligir castigos ejemplares a quienes hubieran apoyado a los grupos contrarios o simplemente no se decidieran a su favor. En este ambiente se han generado masacres y homicidios selectivos en contra de la población civil, que en este contexto ha sido percibida como parte del conflicto armado.

El narcotráfico explicaría, en buena medida, los altos índices de muertes violentas en esta región, si se tiene en cuenta la coincidencia entre el “boom” de la cocaína y las alzas y bajas de los homicidios alrededor de la tendencia central de la curva, que es de ascenso a partir de inicios de los años 80, hasta alcanzar su máximo nivel en los primeros años de la década del 90. Los dos puntos de más fuerte subida de la curva de homicidio en esta región (1991 y 1992), coinciden con la cronología del narcotráfico que en estos años logra altos ingresos, antes de que se produjera el desmantelamiento de las estructuras más importantes del tráfico de

15. Las Convivir o grupos rurales de autodefensa fueron creadas y posteriormente desintegradas por el Gobierno Samper (1994-1998). Uno de los factores que más pesó en la abolición de estos grupos, fue la forma artificiosa como las organizaciones proscritas buscaron legitimarse utilizando a las cooperativas de seguridad auspiciadas por el Estado como fachada de su acción criminal.

16. López, M., 1999, “Conflicto Armado y Economía Cafetera”, en *Conflictos Regionales, La Crisis del Eje Cafetero*, FESCOL-IEPRI, Bogotá.

drogas. Es obvio que del elevado número de muertos sólo una pequeña parte depende directamente de la organización narcotraficante, en forma de homicidios selectivos, de víctimas del terrorismo y, un poco más numerosos, de los ajustes de cuentas y “vendettas” internas¹⁷. Pero muchísimos más son los homicidios que tienen relación indirecta con el narcotráfico, bien sea por el modelo cultural que impuso, a través del cual promueve la justicia privada, el armamentismo y la corrupción, que son puntos que no por ser difícilmente cuantificables en estadísticas son menos decisivos para explicar las propias cifras; o por la congestión que produjo al sistema de justicia profundizando la impunidad en el país, circunstancia que favoreció la difusión de la violencia.¹⁸

Con respecto a la segunda zona¹⁹, en el suroriente del país se registran procesos activos de colonización, desarrollados por movimientos migratorios generados por la violencia y la descomposición campesi-

na en la región andina. La carencia de infraestructura vial y de servicios, la poca disponibilidad de suelos para la actividad agrícola, la baja productividad, la nula integración con los mercados nacionales o regionales, unida a la precaria presencia del Estado, dificultan la vinculación del colono a la tierra, conformándose así una economía parcelaria itinerante que, a la vez que ensancha la frontera agrícola, favorece el establecimiento de cultivos ilícitos. Las regiones corresponden a las de mayor intensidad del conflicto armado, el piedemonte Llanero y zonas de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta. En estas poblaciones rurales los altos índices de violencia, que en el presente se encuentran relacionados con la presencia de actores armados ilegales, se registran incluso antes de que irrumpieran la guerrilla y los paramilitares. La tradición de violencia en las áreas de colonización ha estado determinada por el carácter de desorganización social, donde las reglas del juego terminan

17. Cubides, F., Olaya A. y Ortiz, C., 1998, *La Violencia y el Municipio Colombiano*, Universidad Nacional, Centro de Estudios Sociales, Bogotá.

18. Rubio, M., 1996, *Crimen sin Sumario*, Cede - Universidad de los Andes, Bogotá.

Este autor muestra cómo la impunidad jugó un papel decisivo en la difusión del homicidio en el momento de mayor auge del narcotráfico a principios de los años noventa hasta el punto que la probabilidad de que uno fuera juzgado llegó a ser de alrededor del 6%, un porcentaje preocupante si se compara con el 35% en el que aproximadamente se situaba en los años sesenta. Así mismo, mientras que a mediados de los sesenta por cada cien homicidios cometidos se capturaban más de 60 presuntos culpables, el porcentaje rondaba a comienzos de los noventa en el 20%; y la probabilidad de que un homicidio fuera condenado cayó del 11% al 4% respectivamente. Ante esta situación, es de suponer que las muertes producidas por la violencia organizada serán dejadas de lado, por cuanto su esclarecimiento requiere mayor esfuerzo investigativo así como enfrentarse al poder de intimidación con que cuenta este tipo de violencia.

19. Ver Vicepresidencia de la República, julio de 2001, “Panorama actual del Suroriente Colombiano”, publicación del Observatorio de Derechos Humanos, Bogotá.

siendo impuestas a través de estrategias individuales dispersas, cambiantes y promiscuas, que explicaría el recurso al homicidio, como solución instrumental y/o expresiva de concurrencia y de diferendos²⁰.

En el departamento de Putumayo, los homicidios en los últimos años se concentran en Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Orito. Coinciden los altos índices de homicidio con las zonas que presentan mayor dinámica económica, principalmente alrededor de las actividades de la coca y el petróleo. Igualmente, es allí donde las FARC y los grupos paramilitares acuden a estrategias individuales y producen la muerte de civiles en la disputa por el control de estas poblaciones. En Caquetá, los homicidios originados por los actores del conflicto armado afectan principalmente municipios donde la actividad armada de la guerrilla es particularmente intensa, como Puerto Rico, El Doncello, Florencia, San Vicente del Caguán y Milán.

En el departamento del Meta, la guerrilla y los grupos de autodefensa coinciden en municipios donde prima la agricultura comercial y la ganadería. La intensidad de la violencia en el piedemonte se explica por la presencia de las FARC, por las actividades relacionadas con el procesamiento de coca y por la expansión de los grupos paramilitares. El conflicto ar-

mado es especialmente intenso en municipios donde se concentra un elevado número de asesinatos, como Puerto Gaitán, San Juan de Arama, Vista Hermosa, El Castillo, Cubarral y Puerto Lleras. A la confluencia de elevada intensidad del conflicto armado y los asesinatos de civiles, se suma un alto número de secuestros en Villavecencio, Acacías, San Martín, Lejanías y Mesetas.

En Guaviare, las diferencias locales van marcando tipos diferentes de violencia. De tal suerte, El Retorno presenta un tipo de violencia originada en la delincuencia común que llena el espacio que dejan las FARC, al convertir al municipio en zona de confrontación esporádica y límite de su esfera de influencia. En Calamar la violencia tendría mayor relación con las FARC que, al igual que en Miraflores, acude a la instigación de la población para impedir que la delincuencia común se extienda, en el contexto de la bonanza coquera, y para frenar la posibilidad de que se gesten grupos paramilitares.

Por último, se puede establecer que doscientos de los trescientos quince municipios que se destacan por su elevada concentración de homicidios en el Mapa 8, a la vez se encuentran afectados por el conflicto armado, así como muchos registran también una alta aglutinación de muertes causadas por los actores organizados de la

20. Ortiz, C., 2001, "La Violencia en el Municipio Colombiano", en *Economía: Crimen y Conflicto*, Universidad Nacional, Bogotá.

violencia. La convergencia geográfica de éstos fenómenos permite seguir insistiendo en que los altos índices de homicidio en los municipios colombianos tienen una relación muy estrecha con el conflicto armado y la presencia de actores violentos. De tal suerte, el análisis de los mapas presentados aquí, sugiere que la concentración geográfica de la violencia se explica por las organizaciones de justicia privada que actúan en el norte del Valle, el Eje Cafetero, las montañas antioqueñas y la región del occidente de Boyacá; mientras que en el piedemonte de la Cordillera Oriental (municipios dispersos de Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, Guaviare y parte de Putumayo), el Urabá, La Sierra Nevada de Santa Marta, La Serranía del Perijá y el Magdalena Medio (municipios de Bolívar, Cesar, Antioquia y Santander), la violencia sería atribuible a los grupos paramilitares y a la guerrilla.

4. CONCLUSIONES

En una situación tan compleja como la que aquí se ha descrito, difícilmente una Constitución por sí sola podría producir el efecto de lograr la paz, más si se tiene en cuenta que la prolongación del conflicto armado no se fundamenta en la exclusión y desigualdad imperantes en el país, sino más bien en la gran autonomía adquirida por sus protagonistas, sobre todo en el campo financiero, haciendo que pierda importancia la búsqueda de apoyo social y político en torno a lograr cambios estructurales que

garanticen los derechos fundamentales para el conjunto de los colombianos.

La evolución de la geografía del conflicto colombiano, muestra la forma en que éste se ha ido ampliando con el paso de los años y el fortalecimiento de la guerrilla, que durante la década de los ochenta y principios de los años noventa logró dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, desdoblarse para ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia a nivel local.

La Constitución de 1991, que abre un amplio espacio a la descentralización, genera un efecto perverso no deseado en cuanto la guerrilla dirige ahora sus mayores esfuerzos hacia la conquista del control de las poblaciones, como el medio para lograr el reconocimiento de influencia en la gestión local del país. Al constituirse como poder *de facto* en los municipios, busca apoyarse en esta gestión local para ganar espacios de negociación con el poder central, reclamando legitimidad y representatividad nacional. Este aspecto se encuentra como un objetivo claro y preciso, de gran significado para la guerrilla.²⁰

En la disputa por el control de territorios considerados estratégicos por los protagonistas del conflicto, éstos pasan de manos de un actor a otro sucesivamente. Con el fin de imponer sus reglas y homogenizar el territorio según sus intereses, los grupos armados le imprimen una dinámica local amigo-enemigo al conflicto. Esta lógica es aplicada en las zonas de gran dis-

puta entre paramilitares y guerrillas, como La Sierra Nevada de Santa Marta, Catumbo, Urabá, Magdalena Medio y Putumayo, donde los grupos al margen de la ley han actuado con especial intensidad, golpeando civiles inermes por medio de asesinatos selectivos y de masacres, que han sido frecuentes a partir de 1997.

En estos complejos escenarios, la violencia asociada a los actores del conflicto armado tiende a ser cada vez mayor en la medida en que se imponen los asesinatos y masacres de civiles que son percibidos por las partes en conflicto como apoyos del adversario. Hacia el inmediato futuro las acciones de los grupos paramilitares y la guerrilla involucrarán más a los civiles, en una dinámica en la que el desplazamiento será la constante, pues las respuestas de los actores para mantener su influencia en las zonas consideradas estratégicas, se centrarán en la población.

Entre las zonas rurales más afectadas y donde se observa una alta difusión de la violencia homicida, se destacan la parte occidental de las cordilleras el Valle interandino del río Cauca en los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, y la parte oriental de las cordilleras en zonas de colonización de frontera de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.

Las áreas más violentas en general están asociadas a la existencia de una estructura social heterogénea, con organizaciones armadas enfrentadas en torno a importantes intereses de carácter estratégico. Aun

cuando no constituya un factor determinante, la violencia coincide también con profundos desequilibrios sociales propios de regiones con economías dinámicas que atraen migrantes y donde la distribución del ingreso es inequitativa. En estas regiones no se ha podido establecer firmemente una base jurídica e institucional que dicte con claridad las reglas del juego y permita neutralizar la acción violenta de los diferentes actores en competencia. De otro lado, los reducidos niveles de violencia en general son más frecuentes en los municipios más atrasados que ante los intereses de los protagonistas del conflicto doméstico, tienen menor potencial estratégico.

La producción de violencia en medio del conflicto interno, como se constata en Colombia, no es un proceso caprichoso, sino que está regulado en extremo y responde al desarrollo de planes cuidadosamente dirigidos hacia objetivos precisos. En consecuencia, existe una alta concentración de los asesinatos cometidos por los protagonistas del conflicto en municipios que al mismo tiempo registran un elevado número de homicidios. Esto ocurre, por la disputa entre actores armados que recurren a la violencia generando una dinámica que, por un lado, afecta tanto a miembros de estas organizaciones rivales como a no miembros, y por el otro, potencia una espiral de acciones violentas que a partir de núcleos muy críticos se extiende espacialmente hacia municipios contiguos, donde los homicidios tienden a persistir por un tiempo.

En definitiva, las transformaciones experimentadas en la última década impiden reconocer el conflicto interno colombiano como una guerra civil, donde más que poderío militar se requiere de un elevado grado de articulación con la población y de legitimidad. En la dirección opuesta, los actores armados, con el propósito de ampliar su influencia en zonas estratégicas para la confrontación, han terminado degradando su accionar al haber convertido a los civiles inermes en objetivo de la violencia. Se hace necesario, entonces, que los esfuerzos del Estado y la comunidad internacional dirigidos a lograr la paz den prioridad a la población civil, protegiéndola y rodeándola de las garantías que aseguren su participación en la definición del contenido y alcance de los acuerdos a que haya lugar con los protagonistas de la guerra, de manera que la solución negociada del conflicto represente una verdadera oportunidad de cambio para la Nación.

BIBLIOGRAFÍA

- (1999). “El Terror, Recurso Estratégico de los Actores Armados: Reflexiones en Torno al Conflicto Colombiano”, en *Análisis Político*, No. 37, Iepri - Universidad Nacional, Bogotá.
- Cohen, J. y Tita, G., 1999. “Diffusion in Homicide”, en *Journal of Quantitative Criminology*, Vol 15. No.4.
- Collier, P., 2001, “Causas Económicas de las Guerras Civiles y sus Implicaciones de Política”, en *Revista El Malpensante*, No.30, Bogotá.
- Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987, *Colombia: Violencia y Democracia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Cubides, F., Olaya A. y Ortiz, C., 1998, *La Violencia y el Municipio Colombiano*, Universidad Nacional, Centro de Estudios Sociales, Bogotá.
- Kalyvas, S., 2001, “La violencia en Medio de la Guerra Civil. Esbozo de una Teoría”, en *Análisis Político*, No.42, Iepri - Universidad Nacional, Bogotá.
- Lair, E., 2001, “Colombia: Una Guerra Contra los Civiles”, en *Revista Colombia Internacional*, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Bogotá.
- López, M., 1999, “Conflicto Armado y Economía Cafetera”, en *Conflictos Regionales, La Crisis del Eje Cafetero*. FESCOL-IEPRI, Bogotá.
- Ortiz, C., 2001, “La Violencia en el Municipio Colombiano”, en *Economía: Crimen y Conflicto*, Universidad Nacional, Bogotá.
- Pécaut, D., 2001, *Guerra Contra la Sociedad*, Editorial Espasa, Bogotá.
- Rubio, M., 1996, *Crimen sin Sumario*, Cede - Universidad de los Andes, Bogotá.
- Suárez, A., 1999, “Configuraciones y Dinámicas de la Violencia Organizada en Colombia”, en *Revista Colombiana de Sociología*, Volumen IV No.1, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.

